

Brasil tras la primera vuelta de las elecciones de 2026

São Paulo, 5 de octubre de 2026

CONCLUSIONES PRINCIPALES

- 01** Flávio Bolsonaro llega a la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre por delante de Lula, respaldado por una presencia conservadora más fuerte en el Senado y en gobiernos estatales influyentes. La presidencia sigue en disputa, pero el entorno institucional que enfrentará el ganador ya cambió.
- 02** El Partido Liberal (PL) tendrá 28 de los 81 escaños del Senado. Sus potenciales aliados podrían asegurarle una mayoría absoluta, mientras que el centro y la centroderecha siguen siendo indispensables para coaliciones más amplias y para las decisiones que requieren mayorías calificadas.
- 03** Hay ahora dos calendarios políticos relevantes para las empresas: las decisiones del Congreso saliente antes del 1 de febrero de 2027 y la distribución de la conducción parlamentaria y de la influencia regulatoria una vez que asuma la nueva legislatura.
- 04** Las relaciones comerciales, la inversión extractiva, la infraestructura digital y la política social dependerán de la interacción entre las prioridades presidenciales, la negociación parlamentaria y las restricciones institucionales. Una mayoría conservadora no garantiza disciplina fiscal ni certeza regulatoria.

01

Una ventaja electoral con límites importantes

La primera vuelta electoral del 4 de octubre en Brasil dejó al senador Flávio Bolsonaro por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y llevó a ambos candidatos a una segunda vuelta el 25 de octubre. Lula, de 80 años, cumple su tercer mandato presidencial y busca la reelección para un cuarto. Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras su condena por delitos que incluyen un intento de golpe de Estado (en este análisis, Bolsonaro se refiere a Flávio, salvo que se indique lo contrario).

El conteo de la noche electoral, con el 99,99% de las mesas escrutadas, otorgó a Bolsonaro el 47,03% (unos 56,1 millones) de los votos válidos y a Lula el 45,16% (unos 53,9 millones de votos). Para ganar en primera vuelta se requiere más de la mitad de ellos. La segunda vuelta presidencial será el 25 de octubre, pero la delantera le otorga a Bolsonaro una ventaja significativa, reforzada por los avances conservadores en otros espacios del sistema político.

La historia le da más peso a esa ventaja. Desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989, todos los candidatos que encabezaron la primera vuelta en una contienda que requirió balotaje terminaron ganando. Ese patrón no define esta elección, pero pone en perspectiva el desafío de Lula: debe revertir una desventaja mientras reconstruye la percepción de que su coalición todavía puede imponerse.

El margen de crecimiento restante es menos evidente de lo que sugiere el resultado general. **Es posible que Bolsonaro ya haya absorbido votos tácticos de último minuto de simpatizantes de otros candidatos de derecha que esperaban derrotar a Lula en primera vuelta.** Si eso ocurrió, parte del voto conservador que normalmente se transferiría en una segunda vuelta ya está incluido en su total. Se trata de una hipótesis, no de evidencia de un techo fijo, pero ayuda a explicar por qué las próximas tres semanas girarán tanto en torno a la movilización como a los apoyos. **Lula necesita acortar la distancia llegando a los votantes que se quedaron en casa y persuadiendo a parte de quienes eligieron a otros candidatos; Bolsonaro necesita retener su coalición ampliada mientras encuentra el apoyo adicional que se le escapó el domingo.**

02

El Senado altera el equilibrio de poder

La carrera presidencial sigue abierta, pero la elección ya modificó las instituciones a través de las cuales gobernará el ganador. El Congreso Nacional de Brasil está compuesto por la Cámara de Diputados, de 513 miembros, y el Senado, de 81. Los votantes renovaron la totalidad de la Cámara y 54 escaños del Senado, es decir, dos tercios de la cámara alta; los otros 27 senadores fueron electos en 2022 y permanecen hasta 2031. Cada uno de los 26 estados y el Distrito Federal tiene tres senadores, y quienes fueron electos este año ejercerán hasta 2035. **Este nuevo equilibrio entra en vigor el 1 de febrero de 2027, lo que deja al Congreso saliente varios meses para moldear el punto de partida del próximo gobierno.**

El cambio de mayor peso es el ascenso del PL de Bolsonaro a 28 escaños en el Senado, frente a nueve del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Al combinar a los senadores recién electos con aquellos cuyos mandatos continúan, la proyección le entrega al PL una plataforma poderosa desde la cual organizar una mayoría. Su capacidad para lograrlo dependerá de los partidos que lo rodean.

El centro y la centroderecha conservan los votos capaces de convertir esa plataforma en poder de gobierno. Se proyecta que MDB, PP, PSD y União Brasil sumen 24 escaños entre ellos: ocho, seis, cinco y cinco, respectivamente. Republicanos tendría otros seis y Novo, tres. La relevancia de esta distribución radica en la negociación que hace necesaria: el PL puede dominar el campo conservador, mientras el centro determina hasta dónde avanza su agenda.

Una coalición ilustrativa muestra dónde está la capacidad de presión. El PL, Republicanos y Novo sumarían en conjunto 37 escaños; al agregar al PP llegarían a 43, por sobre el umbral de mayoría absoluta de 41 escaños. Sin embargo, el PP, o Progresistas, pertenece al mismo centro negociador que el Partido Social Democrático (PSD), União Brasil y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Sus posiciones estarán determinadas por intereses sectoriales, la política estadual y el acceso a cuotas de influencia en la próxima administración. La aritmética abre un camino hacia una mayoría conservadora, mientras que las negociaciones determinan si ese camino está disponible para una votación en particular.

Para Lula, esto podría convertir al Senado en un fuerte contrapeso al ejercicio de la autoridad presidencial. Una coalición opositora capaz de negar su aprobación podría bloquear sus nominaciones al Supremo Tribunal Federal, el máximo tribunal de Brasil, y objetar nombramientos diplomáticos o regulatorios que requieren la aprobación del Senado. Bolsonaro abordaría esas mismas decisiones desde una posición más favorable, con aliados capaces de ayudarlo a asegurar las ratificaciones. En cualquiera de los dos casos, los

nombramientos pasarían a formar parte de la negociación más amplia sobre las prioridades del gobierno, lo que daría a los senadores influencia sobre instituciones cuyas decisiones moldean el entorno de negocios.

Esa influencia tiene límites, y el juicio político a ministros del Supremo Tribunal (una agenda que Bolsonaro defiende públicamente) los deja en evidencia. Una condena requiere 54 votos, es decir, dos tercios del Senado, muy por encima de la coalición ilustrativa de 43 escaños. Por lo tanto, el PL necesitaría un apoyo considerable más allá de sus aliados más cercanos para lograr ese resultado, incluso si pudiera generar presión para iniciar los procesos; las etapas iniciales también involucran cuestiones procesales y jurídicas propias. Las enmiendas constitucionales fijan otro umbral exigente, que requiere 49 senadores y 308 diputados en dos votaciones en cada cámara. El poder de negociación del centro aumenta a medida que una iniciativa pasa de la legislación ordinaria al cambio institucional.

La primera prueba será la elección de la presidencia del Senado y de la conducción de sus comisiones en febrero. Esos cargos determinan qué prioridades ganan impulso, con qué rapidez avanzan los nombramientos y si las demandas de juicio político pasan a formar parte activa de la agenda. Un acuerdo de conducción negociado con el centro podría canalizar la fuerza del PL hacia la legislación económica y, al mismo tiempo, contener la confrontación con los tribunales. El control de la mesa directiva y de las comisiones de la Cámara será igual de relevante para las medidas que requieren de ambas cámaras, aunque su distribución partidaria final aún está por consolidarse.

03

El poder estadual y la ventana legislativa

El cambio también se extiende más allá de Brasilia. Brasil elige gobernadores en 27 jurisdicciones, que abarcan sus 26 estados y el Distrito Federal. Los reportes de la noche electoral identificaron 20 victorias en primera vuelta, con cuestionamientos judiciales que aún afectan algunos resultados, y aliados conservadores se quedaron con importantes centros de poder económico y electoral, como São Paulo y Minas Gerais. El PT conservó bastiones relevantes en el nordeste. Para las empresas, este equilibrio territorial es importante porque los gobiernos estaduais traducen la política nacional en decisiones concretas sobre permisos, infraestructura, compras públicas y tributación dentro de su jurisdicción.

La siguiente fase comienza antes de que los nuevos senadores asuman. **Desde ahora y hasta el 1 de febrero, el Congreso saliente mantiene sus atribuciones, pero la elección cambia los incentivos detrás de sus votaciones.** Los parlamentarios que fueron derrotados, que optaron por no repostularse o que dejan el Congreso para asumir otros cargos de elección ya no enfrentan la misma presión inmediata de defender un mandato parlamentario. En consecuencia, podrían estar más dispuestos a respaldar acuerdos impopulares, aceptar concesiones sectoriales o resolver controversias que resultaban políticamente difíciles durante la campaña. Quienes regresan al Congreso, en tanto, se estarán posicionando dentro de la próxima coalición de gobierno. Esa combinación abre una ventana para votaciones difíciles cuyos resultados podrían condicionar a la administración entrante.

Para las empresas, esperar hasta febrero podría significar llegar cuando ya se hayan tomado decisiones importantes. El presupuesto de 2027 y la prohibición de las apuestas son prioridades inmediatas, mientras que la propuesta de pasar de una jornada de seis días de trabajo y uno de descanso a una

semana laboral de cinco días con dos de descanso ilustra el alcance de una negociación con consecuencias relevantes. Junto con un límite de 40 horas semanales, sus períodos de transición y su tratamiento sectorial afectarían directamente la dotación de personal y los costos en el comercio minorista, la hotelería y la gastronomía, y la salud. Al tratarse de una enmienda constitucional, requiere mayorías calificadas, lo que hace que los plazos y la construcción de coaliciones sean particularmente importantes. Los permisos, las medidas fiscales y las renovadas demandas de amnistía también podrían entrar en esta ventana, dependiendo de la disposición de la conducción parlamentaria a ponerlas en tabla.

La legislatura saliente sigue sujeta al escrutinio público, a la disciplina partidaria y a restricciones legales, por lo que una menor exposición electoral crea una oportunidad, no una garantía. Aun así, estos meses merecen una estrategia institucional propia. Un Lula reelecto podría encontrarse con que las decisiones tomadas durante la transición reducen su margen de maniobra; un Bolsonaro victorioso podría beneficiarse de acuerdos alcanzados antes de asumir. Una vez que se instale la nueva legislatura, el foco se desplazará hacia la conducción parlamentaria, los nombramientos y el primer paquete fiscal, con el centro contribuyendo a definir qué parte del programa de cualquiera de los dos presidentes puede concretarse.

04

Entre Estados Unidos y China

La relación de Brasil con Estados Unidos y China es el ámbito en que un cambio de presidente podría transformar de manera más visible el contexto para la inversión. **Se espera que Lula mantenga un enfoque basado en la autonomía diplomática, preservando la importancia estratégica de China mientras se vincula con Washington y Europa.** Eso da a las empresas acceso a una gama más amplia de mercados, financiamiento y alianzas industriales, pero también les exige sortear demandas contrapuestas en materia de tecnología y cadenas de suministro. Los intereses comerciales de Brasil hacen atractivo mantener esas relaciones, aun cuando la rivalidad geopolítica lo vuelve más difícil.

Bolsonaro aportaría una inclinación política más marcada hacia Washington, reforzada por un Congreso conservador capaz de examinar inversiones estratégicas e influir en los nombramientos. Los intereses comerciales empujarían en una dirección más pragmática: su programa también contempla cooperación internacional en minerales críticos, mientras que exportadores y fabricantes tienen poderosas razones para preservar la demanda, el capital y los equipos chinos. La agroindustria, la minería, las telecomunicaciones y los vehículos eléctricos sentirían la tensión entre el alineamiento diplomático y la interdependencia económica.

La consecuencia probable para las empresas es una serie de decisiones selectivas sobre proveedores, alianzas de inversión y acuerdos de exportación. Con Bolsonaro, algunos proyectos podrían acceder a oportunidades respaldadas por Estados Unidos, mientras que los activos vinculados a China atraerían mayor escrutinio. Con Lula, la diversificación seguiría siendo el principio rector, aunque no protegería a las empresas de las restricciones impuestas desde el exterior. Por lo tanto, los ejecutivos deberían evaluar cuán expuestas están sus operaciones específicas a decisiones geopolíticas, en lugar de apoyarse en un único supuesto sobre el alineamiento de Brasil.

05

Apuestas en línea y el espacio para una reapertura negociada

Las apuestas en línea ofrecen el ejemplo más claro de una decisión de negocios que podría resolverse durante la transición parlamentaria. **El 25 de septiembre, Lula dictó una medida provisória (MP), o medida provisoria, que prohíbe las operaciones de apuestas de cuota fija, su intermediación y su publicidad.** Este instrumento presidencial tiene efecto legal inmediato, pero necesita la aprobación del Congreso para convertirse en ley permanente. Su vigencia inicial de 60 días puede prorrogarse una vez, y el plazo se suspende durante el receso parlamentario, lo que otorga al Congreso un rol central en la definición del marco final. La disrupción comercial va mucho más allá de los operadores de apuestas y afecta a los pagos, la publicidad, el patrocinio deportivo y los servicios externalizados.

El obstáculo político para la reapertura es considerable. Datafolha informó un 78% de apoyo a la prohibición de las plataformas de apuestas y los casinos en línea, aunque otras encuestas han registrado niveles de aprobación distintos. A Bolsonaro le costaría oponerse a una política con un respaldo tan amplio sin parecer indiferente al endeudamiento de los hogares y a los daños asociados al juego. Su programa anterior privilegiaba las restricciones y la protección por sobre una prohibición total, lo que sugiere espacio para un modelo diferente. Para que ese modelo sea políticamente viable, sus defensores tendrían que demostrar una mayor protección al consumidor, una fiscalización creíble y una distinción clara entre los productos que se permiten y los que se prohíben.

Por eso importa el Congreso saliente. Los legisladores con menor exposición electoral inmediata podrían ser más receptivos a argumentos sobre empleo, recaudación tributaria, financiamiento del deporte y el desplazamiento de usuarios hacia operadores ilegales. El revés de Lula en la primera vuelta podría debilitar su capacidad para insistir en la prohibición original si los líderes parlamentarios convergen en torno a un marco más acotado. Seguiría contando con la autoridad del Ejecutivo, un eventual veto y un argumento popular a favor de la prohibición, pero el equilibrio del poder de negociación podría haberse movido en su contra. La oportunidad práctica está en negociar una alternativa defendible durante esta ventana, con suficiente apoyo parlamentario y resguardos públicos como para sobrevivir a la próxima fase política.

06

Energía y minería frente a estrategias comerciales en competencia

La energía y la minería reúnen las dimensiones nacional e internacional de la elección. Ambas dependen de la capacidad de Brasil para autorizar proyectos extractivos, proveer la infraestructura de apoyo y capturar más valor de sus recursos. **La agenda industrial y de transición de Lula podría sostener la inversión en procesamiento local junto con la producción continua de hidrocarburos. Bolsonaro pone mayor énfasis en una tramitación más rápida de permisos y en el capital internacional, y conecta en su programa los minerales, la electricidad limpia y la infraestructura digital.** La oportunidad es considerable con cualquiera de las dos administraciones; lo que cambiaría es el camino hacia la concreción comercial.

Un Congreso más conservador podría ayudar a Bolsonaro a simplificar los permisos o empujar a Lula hacia nuevas concesiones en materia de licenciamiento. Decisiones más rápidas serían valiosas para proyectos con horizontes de desarrollo largos, pero su durabilidad depende de evaluaciones creíbles, de los derechos sobre la tierra y del diálogo con las comunidades afectadas. Una aprobación que termina empantanada en litigios puede retrasar la inversión y debilitar el acceso al financiamiento. Del mismo modo, una administración que respalde los recursos estratégicos pero deje a las agencias reguladoras sin capacidad para tramitar solicitudes podría frustrar proyectos por inacción.

El comercio internacional influirá en qué inversiones logran superar esos obstáculos. **Relaciones más estrechas con Washington podrían ampliar la demanda de minerales críticos desde cadenas de suministro fuera de China, mientras que la diversificación diplomática de Lula podría ampliar las opciones de financiamiento y exportación.** Los cambios en el acceso a equipos, tecnologías de procesamiento o compradores extranjeros incidirían directamente en la economía de los proyectos. Por lo tanto, las empresas deberían vincular su estrategia de permisos con su exposición comercial, incluidas las oportunidades y los costos de agregar capacidad de procesamiento en Brasil.

07

Centros de datos y las restricciones detrás de los incentivos a la inversión

Los centros de datos ofrecen una perspectiva más sólida de continuidad, aunque los inversionistas deberían examinar con atención cómo funcionaría esa continuidad. **Lula ya promulgó el régimen tributario “Redata”, y el programa de Bolsonaro vincula la infraestructura de cómputo con las ventajas energéticas y minerales de Brasil. Ambos ven una oportunidad para atraer inversión a la economía digital. Sus diferencias probablemente surgirán en las condiciones asociadas a los incentivos y en la velocidad con que pueden avanzar los proyectos,** incluidos los requisitos de servicio local y las obligaciones de investigación de Redata.

Se espera que Lula mantenga esos incentivos ligados al desarrollo industrial y a la capacidad tecnológica nacional. Bolsonaro podría favorecer una autorización más simple y un llamado más directo a operadores internacionales, aunque cualquier rediseño seguiría requiriendo los cambios legales correspondientes. Para los desarrolladores, sin embargo, las preguntas decisivas suelen surgir después de que se otorga el incentivo: cuándo estará disponible la conexión a la red, cómo se fijará el precio de la electricidad y si es posible asegurar el agua y los permisos locales. La calidad de la ejecución determinará qué parte de la ventaja que Brasil promueve llega efectivamente al proyecto.

Estos proyectos también estarán expuestos a decisiones geopolíticas. Las restricciones a los equipos de computación avanzada y el escrutinio sobre proveedores chinos podrían afectar el abastecimiento y las alianzas con cualquiera de los dos presidentes. Un mayor alineamiento con Washington podría favorecer algunos desarrollos y, a la vez, reducir sus opciones de proveedores. Los operadores necesitan evaluar en conjunto la energía, los equipos y los acuerdos con clientes, en particular cuando un período de construcción prolongado los deja expuestos a cambios de política antes del inicio de las operaciones.

08

Guerras culturales y las presiones sobre un gobierno de Bolsonaro

Una victoria de Bolsonaro plantearía una prueba de otro tipo: **cómo satisfacer a un electorado conservador fortalecido mientras se impulsa una agenda de inversión e innovación.** Las redes parlamentarias evangélicas podrían presionar por cambios en derecho de familia, matrimonio entre personas del mismo sexo, temas reproductivos y educación. La reforma del Código Civil, actualmente en análisis, ofrece a estas presiones un espacio legislativo concreto, mediante disputas sobre las definiciones de familia, el divorcio, la herencia y la protección económica de las mujeres. Los derechos constitucionales y las decisiones judiciales limitarían los cambios, mientras que las propias disputas podrían afectar a empleadores, aseguradoras e instituciones financieras a través de beneficios, cargas familiares y productos vinculados a la familia.

La salud podría convertirse en otro foco de tensión, en particular en torno a la vacunación obligatoria, la autoridad parental y los límites éticos de la intervención genética. Estos temas exigen precisión: las terapias génicas para pacientes actuales plantean preguntas distintas de la investigación con embriones o la edición genómica heredable, y no se puede asumir que los sectores evangélicos se opongan a ellas de manera uniforme. El propio programa de Bolsonaro incluye la inmunización. La preocupación para las empresas es cómo la movilización política podría influir en la confianza pública, el financiamiento y las decisiones de acceso, incluso cuando la autorización de productos siga dependiendo de evaluaciones técnicas. Los desarrolladores de terapias avanzadas tendrían que participar en ese debate mientras abordan el desafío separado del reembolso y la asequibilidad.

La presión por una amnistía para los condenados por el intento de golpe podría absorber aún más la atención parlamentaria e intensificar el conflicto con los tribunales. Los debates sobre las cuotas de acción afirmativa, las universidades públicas y el financiamiento de la investigación alcanzarían la base de talento y de conocimiento científico de la que dependen las empresas. **Lula estaría más inclinado a defender la inclusión y la inversión pública frente a la presión conservadora; Bolsonaro tendría que conciliar las demandas de su base electoral con sus compromisos con la innovación.** El resultado dependería de propuestas, presupuestos y controles de constitucionalidad específicos, pero el potencial de controversias reputacionales ya se extiende al reclutamiento, la publicidad y las alianzas académicas.

09

Política ambiental y acceso a mercados

La política ambiental se desarrollará en el marco de una disputa que ya está en curso. El Congreso ha desafiado a Lula en torno al marco de licenciamiento, y su reelección mantendría el respaldo del Ejecutivo a la protección del clima y de los bosques, aunque lo obligaría a negociar con una legislatura más conservadora. Bolsonaro encontraría mayor afinidad parlamentaria para procedimientos más simples y para un enfoque que presenta la conservación y la producción como compatibles. La diferencia resultante podría sentirse de forma más directa en la manera en que se implementan las normas vigentes y se evalúan los proyectos.

Para las empresas con exposición internacional, esas decisiones internas interactúan con estándares fijados en otros lugares. Una autorización más fácil en Brasil puede acelerar la inversión, pero los compradores y financistas extranjeros seguirán pidiendo la misma evidencia sobre trazabilidad, emisiones y salvaguardas. Una protección ambiental más estricta puede mejorar la credibilidad internacional sin resolver las demoras administrativas. Las empresas necesitarán integrar estos requisitos en una sola estrategia de proyecto, alineando los permisos nacionales con las condiciones de financiamiento, el acceso a los mercados de exportación y la aceptación de las comunidades.

10

Escenarios para las empresas según la agenda de políticas públicas

La matriz a continuación expone cómo estas decisiones políticas podrían afectar a las empresas en el conjunto de la agenda de políticas públicas. Combina las prioridades declaradas por los candidatos con nuestra evaluación de las negociaciones y los desafíos de implementación que enfrentaría cada uno.

ÁREA DE POLÍTICA	ESCENARIO DE VICTORIA DE LULA	ESCENARIO DE VICTORIA DE BOLSONARO
Estados Unidos y China	La diversificación diplomática preservaría el comercio y la inversión china junto con el vínculo con Estados Unidos. Las empresas ganan opciones de alianzas, pero deben sortear exigencias contrapuestas en materia de tecnología y seguridad. Un Senado conservador podría escrutar nombramientos e inversiones estratégicas.	Un mayor alineamiento con Estados Unidos podría favorecer determinadas alianzas en cadenas de suministro y aumentar el escrutinio sobre activos vinculados a China. Exportadores e inversionistas industriales seguirían presionando por preservar los mercados chinos; una desvinculación comercial amplia tendría costos considerables.
Mercosur y la Unión Europea	La implementación del acuerdo comercial interino, aplicado provisionalmente desde mayo de 2026, seguiría siendo central. Los exportadores deberían evaluar los aranceles escalonados, las reglas de origen y los requisitos sanitarios; el respaldo político interno no elimina las obligaciones de cumplimiento europeas.	La apertura comercial probablemente seguiría siendo atractiva, con posibles presiones por mayor flexibilidad dentro del Mercosur. Las tensiones en torno a las exigencias ambientales europeas podrían complicar la implementación. Las empresas deberían distinguir la retórica política de las obligaciones exigibles del tratado y de los calendarios arancelarios.
BRICS	La continuidad del compromiso político preservaría la cooperación y los potenciales canales de financiamiento para el desarrollo a través del grupo fundado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las empresas deben evaluar caso a caso la elegibilidad de los proyectos y la exposición a sanciones.	El grupo podría recibir menos énfasis diplomático a medida que se fortalecen los lazos con Washington. La salida no es un compromiso establecido. Las empresas deberían prepararse para cambios en el patrocinio político de la cooperación, tratando por separado las obligaciones financieras y comerciales existentes.

ÁREA DE POLÍTICA	ESCENARIO DE VICTORIA DE LULA	ESCENARIO DE VICTORIA DE BOLSONARO
Apuestas en línea	El Ejecutivo buscaría sostener la prohibición, pero un menor peso parlamentario podría facilitar un acuerdo legislativo más acotado. Operadores y proveedores enfrentan ingresos interrumpidos, exposición contractual y riesgo de fiscalización hasta que se establezca un marco legal de operación.	El apoyo popular a la prohibición limitaría la reapertura. Podría negociarse un modelo más estricto, potencialmente por parte del Congreso saliente. Ni la victoria electoral ni la fuerza parlamentaria conservadora garantizan la restitución de licencias ni el levantamiento de las restricciones a la publicidad.
Biotecnología y regulación biológica	Un enfoque de salud pública y política industrial podría favorecer la capacidad y el acceso locales, sujeto a evidencia, bioseguridad y asequibilidad. Los inversionistas farmacéuticos, de vacunas y de biotecnología deben distinguir la autorización de comercialización de las compras públicas y el reembolso.	Podrían impulsarse procedimientos más simples e incentivos a la inversión junto con un escrutinio ético conservador. Las terapias génicas, la investigación con embriones y los organismos genéticamente modificados plantean cuestiones jurídicas distintas. La autonomía regulatoria, los requisitos de evidencia y los presupuestos de reembolso siguen siendo decisivos para el acceso comercial.
Política ambiental	La protección del clima y de los bosques mantendría el respaldo del Ejecutivo, mientras que legisladores conservadores podrían resistir nuevas restricciones. Las empresas podrían ganar credibilidad internacional gracias a la continuidad, pero seguirían enfrentando demoras en los permisos y una implementación negociada de las normas vigentes.	Un Congreso más afín podría respaldar un licenciamiento simplificado y normas orientadas a la producción. La flexibilización interna dejaría intactas las obligaciones ambientales de compradores, financistas y estándares extranjeros. Los litigios y la exposición reputacional podrían contrarrestar aprobaciones administrativas más rápidas.
Energía y minería	La inversión en transición, los hidrocarburos y el procesamiento local de minerales podrían coexistir dentro de la política industrial. Las oportunidades dependen de la capacidad de otorgar permisos, la aceptación de las comunidades y la credibilidad de los incentivos. Lazos comerciales diversificados podrían ampliar las opciones de financiamiento y exportación.	Una tramitación más rápida de permisos y la inversión privada podrían favorecer proyectos extractivos y capacidad de procesamiento. Los acuerdos de cadenas de suministro orientados a Estados Unidos ofrecen oportunidades, mientras que las fricciones con China podrían afectar la demanda y los equipos. Las restricciones legales y comunitarias seguirían incidiendo en la ejecución.
Centros de datos	Redata ofrece un marco de incentivos ya existente, con condiciones de desarrollo industrial. Los inversionistas deben evaluar la elegibilidad, las obligaciones de investigación, el acceso a energía y los permisos. La negociación parlamentaria y la capacidad fiscal podrían influir en la durabilidad y la implementación de los beneficios.	El apoyo a la infraestructura de cómputo y a normas más simples sugiere una posible continuidad en la atracción de inversiones. Los cambios a los incentivos vigentes requerirían una acción legislativa. La capacidad de la red, las restricciones a los equipos y el escrutinio de proveedores podrían pesar más que el posicionamiento de campaña.
Privatizaciones y asociaciones público-privadas	Las concesiones y asociaciones seguirían disponibles, pese a una mayor cautela respecto de la venta de activos. Los desarrolladores deberían evaluar la capacidad de compras públicas, las salvaguardas contractuales y los recursos fiscales necesarios para cumplir con los pagos públicos durante la vida del proyecto.	Una mayor disposición a privatizar y ampliar concesiones podría ensanchar la cartera de proyectos. Un Congreso afín ayuda, pero no resuelve la valorización, la política tarifaria ni las aprobaciones a nivel estadual. Los proyectos siguen requiriendo modelos de ingresos creíbles y una asignación de riesgos exigible.

ÁREA DE POLÍTICA	ESCENARIO DE VICTORIA DE LULA	ESCENARIO DE VICTORIA DE BOLSONARO
Acceso a la salud	La expansión del Sistema Único de Salud (SUS), el servicio de salud universal de Brasil financiado con impuestos, favorecería las oportunidades de servicios públicos y de suministro. Las restricciones presupuestarias y la evaluación del valor clínico podrían limitar la adopción de productos de alto costo.	La atención digital y un mayor uso de la capacidad de prestadores privados podrían crear oportunidades de contratación dentro del SUS. La austeridad fiscal podría restringir las compras. Los proveedores deberían evaluar la confiabilidad de los pagos, las decisiones de reembolso y los compromisos de acceso con independencia de las promesas de eficiencia.
Equilibrio fiscal y tributación	El marco fiscal vigente y el enfoque de inversión pública probablemente continuarían. Un Congreso más conservador podría exigir moderación mientras protege su propio gasto. Las condiciones de financiamiento dependen de una ejecución creíble, de las decisiones de gasto y de la implementación de la reforma tributaria.	Recortes de gasto, una regla fiscal rediseñada y menores impuestos podrían mejorar la confianza si se aplican de manera coherente. Las demandas parlamentarias y el gasto obligatorio limitan los ahorros. Rebajas de impuestos sin un ajuste duradero del gasto podrían empeorar las primas de riesgo y las condiciones de inversión.
Jornada laboral y semana de cinco días	El respaldo político a un esquema de 40 horas y cinco días enfrentaría negociaciones parlamentarias sobre transiciones y tratamiento sectorial. Los empleadores deberían modelar dotación, remuneraciones y cobertura de servicios a partir del texto efectivamente aprobado y no de las propuestas anunciadas.	El programa enfatiza la flexibilidad más que un compromiso equivalente con el cambio constitucional propuesto. Legisladores conservadores podrían buscar excepciones o una transición más lenta, pero el apoyo ciudadano a jornadas más cortas podría limitar una oposición abierta.
Derecho de familia y política cultural	El Ejecutivo estaría más inclinado a defender la inclusión y los derechos existentes frente a iniciativas conservadoras. Los debates sobre el Código Civil y las disputas judiciales aún podrían afectar beneficios y productos financieros vinculados a la familia. Las marcas enfrentan expectativas polarizadas de sus grupos de interés.	Grupos evangélicos y conservadores podrían presionar por cambios en el derecho de familia y la política social. Las protecciones constitucionales limitan su implementación. Empleadores, aseguradoras y anunciantes deberían anticipar disputas que afecten a cargas familiares, políticas de género y posicionamiento público.
Universidades e investigación	Las universidades públicas, la inclusión y la investigación mantendrían respaldo político, sujeto a restricciones presupuestarias y del Congreso. Las empresas que dependen de alianzas académicas deberían monitorear los fondos concursables, el financiamiento institucional y la continuidad de los programas de talento.	Los compromisos con la innovación coexisten con la presión conservadora sobre los currículos, las cuotas y el gasto público. Los cambios no están predeterminados. Las alianzas de investigación y el reclutamiento podrían enfrentar disputas de política pública, mientras que las iniciativas de ciencia y tecnología vinculadas a la industria podrían ganar respaldo.
Amnistía y conflicto institucional	La oposición a la amnistía podría profundizar la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo y absorber el tiempo necesario para la legislación económica. Las empresas podrían enfrentar retrasos en las políticas y presión política respecto de sus posiciones públicas.	La presión por avanzar en una amnistía podría entrar en conflicto con las prioridades fiscales y de inversión y desencadenar impugnaciones judiciales. Una mayoría parlamentaria no puede establecer la validez constitucional; la incertidumbre podría afectar la confianza aun si la legislación empresarial ordinaria avanza.

Elaboración Sway LATAM / SEC Newgate.

11

Qué deben monitorear los ejecutivos a continuación

Las empresas deberían seguir ahora dos carriles vinculados. El primero es la segunda vuelta y la coalición que su ganador sea capaz de articular. El segundo es el Congreso saliente, donde las decisiones sobre apuestas, el presupuesto y otras medidas difíciles podrían moldear el entorno de negocios antes de que esa coalición asuma. Hacer seguimiento a quién patrocina una iniciativa, cuándo podría votarse y qué líderes parlamentarios pueden hacerla avanzar será esencial para identificar la verdadera ventana de incidencia.

A partir de febrero, la conducción parlamentaria y los nombramientos regulatorios mostrarán hasta qué punto el giro conservador de la elección se traduce en poder de gobierno. Bolsonaro comenzaría desde una posición institucional más favorable; Lula tendría que invertir más capital político en proteger y adaptar su programa. Ambos seguirían necesitando financiar sus compromisos y asegurar la cooperación de las instituciones federales y estatales. Para los ejecutivos, la tarea es conectar esas negociaciones políticas con las decisiones que determinan el acceso a los mercados, la ejecución de los proyectos y la confianza de largo plazo.

SOBRE NOSOTROS

Sway LATAM y SEC Newgate



MIEMBRO DE SEC NEWGATE

Sway LATAM es miembro de SEC Newgate. Sway LATAM forma parte de esta red global de comunicaciones estratégicas y asuntos públicos, con presencia en más de 30 países y más de 1.300 profesionales. Esto nos permite coordinar el trabajo en Chile con los equipos de la red en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico.

SEC NEWGATE EN BRASIL

SEC Newgate mantiene una operación propia en Brasil desde 2024, ayudando a las empresas a comprender las fuerzas que moldean las políticas públicas y a construir relaciones institucionales efectivas. Reunimos inteligencia política y regulatoria, asuntos públicos, relacionamiento con grupos de interés y comunicaciones estratégicas para anticipar los cambios y traducirlos en decisiones prácticas para los negocios. Con experiencia local y una red internacional, apoyamos tanto a operadores establecidos como a nuevos actores en su relación con el gobierno, el Congreso, los reguladores y la sociedad en general, alineando su estrategia comercial y su reputación con las prioridades cambiantes de Brasil.

swaylatam.com

© 2026 Sway LATAM · Citar mencionando la fuente